

Subsanación demanda expediente D-14189

Andrés Segura Segura <andres.segura@alicanto.legal>

Mié 14/04/2021 16:17

Para: Secretaria3 Corte Constitucional <secretaria3@corteconstitucional.gov.co>

CC: correo@certificado.4-72.com.co <correo@certificado.4-72.com.co>

 2 archivos adjuntos (10 MB)

Memorial subsanación demanda. Art.130 Ley 1955_2019.pdf; Cédulas demandantes.pdf;

Respetados funcionarios de la Corte:

Por medio del presente me permito adjuntar la subsanación de la demanda que se tramita en el expediente D-14189. Igualmente, se encuentra adjunto el anexo enunciado en el numeral 1º de la subsanación, que contiene las cédulas de los demandantes.

Cordialmente,

Andrés Segura Segura

Socio

Alicanto Legal

www.alicanto.legal

+57 (1) 325 1130

Carrera 7 n.º 71-21, torre B oficina 1512

Bogotá D.C., Colombia

Bogotá, 14 de abril de 2021

Honorable Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
CORTE CONSTITUCIONAL
E.S.M.

REFERENCIA: Expediente D-14189. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 130 de la Ley 1955 de 2019 “Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022. Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”.

Actores: MARÍA V ANESSA ARDILA ORTIZ, ANDRÉS SEGURA SEGURA, DIANA LORENA MATEUS LONDOÑO, ANDREA PAOLA CARVAJAL SANTIAGO, LAURA STEPHANY LEÓN HERNÁNDEZ, JESSICA ANDREA VARGAS FERRUCHO, NERLY ROCÍO PINZÓN FLÓREZ, JUAN DAVID ARCINIEGAS PARRA, JOHN EDWARD PACHÓN HENRÍQUEZ, CARLOS EDUARDO PAREJA VISBAL, ÁLVARO GIOVANNU GUTIÉRREZ GODOY.

MP: ALEJANDRO LINARES CANTILLO

MARÍA VANESSA ARDILA ORTIZ —ciudadana colombiana, mayor de edad, identificada con la C.C. n.º 1.012.401.845 de Bogotá D.C.—, **ANDRÉS SEGURA SEGURA** —ciudadano colombiano, mayor de edad, identificado con la C.C. n.º 1.018.436.588 de Bogotá D.C.—, **DIANA LORENA MATEUS LONDOÑO** —ciudadana colombiana, mayor de edad, identificada con la C.C. n.º 1.026.261.728 de Bogotá D.C.—, **ANDREA PAOLA CARVAJAL SANTIAGO** —ciudadana colombiana, mayor de edad, identificada con la C.C. n.º 1.136.884.768 de Bogotá D.C.—, **LAURA STEPHANY LEÓN HERNÁNDEZ** —ciudadana colombiana, mayor de edad, identificada con la C.C. n.º 1.010.235.779 de Bogotá D.C.—, **JESSICA ANDREA VARGAS FERRUCHO** —ciudadana colombiana, mayor de edad, identificada con la C.C. n.º 1.022.4044.409 de Bogotá D.C.—, **NERLY ROCÍO PINZÓN FLÓREZ** —ciudadana colombiana, mayor de edad, identificada con la C.C. n.º 1.071.168.332 de La Calera—, **JUAN DAVID ARCINIEGAS PARRA** —ciudadano colombiano, mayor de edad, identificado con la C.C. n.º 1.010.235.855—, **JOHN EDWARD PACHÓN HENRÍQUEZ** —ciudadano colombiano, mayor de edad, identificado con la C.C. n.º 1.018.408.986—, **CARLOS EDUARDO PAREJA VISBAL** —ciudadano colombiano, mayor de edad, identificado con la C.C. n.º 1.047.464.318 de Cartagena— y **ÁLVARO GIOVANNI GUTIÉRREZ GODOY** —ciudadano colombiano, mayor de edad, identificado con la C.C. n.º 79.646.350 de Bogotá

D.C.—, miembros activos de la Red Juvenil de Arbitraje del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, presentamos memorial de subsanación de la demanda de inconstitucionalidad en virtud de lo establecido mediante auto del 7 de abril de 2021, notificado el día 9 del mismo mes y año.

I. SUBSANACIÓN DE LA DEMANDA.

Los demandantes, con base en lo dispuesto en el auto inadmisorio del 7 de abril de 2021, realizan la siguiente subsanación de la demanda y adecuan los cargos formulados, en los siguientes términos:

1. Ausencia de presentación de cédulas de ciudadanía de los demandantes:

En observancia de lo indicado en los numerales 8 a 11 del auto que inadmitió la demanda, los demandantes anexan a este memorial archivo digital en PDF que contiene copia de las cédulas de ciudadanía que los identifican. En consecuencia, se da cumplimiento al requisito.

2. Inadmisión cargo segundo. Replanteamiento cargo segundo. Sistema tributario injusto pues grava sin considerar la existencia del principio de reparación integral, que se desprende de los artículos 2 y 229 de la Constitución Política, ni del efecto confiscatorio que tiene la contribución demandada, cuya prohibición se encuentra implícita en el artículo 58 *ibidem*.

El segundo cargo de la demanda se fundamenta en que la contribución especial para laudos arbitrales de contenido económico desconoce el principio de reparación integral consagrado el artículo 2 y 229 de la Constitución Política.

El primero de dichos artículos señala, de un lado, que es uno de los fines esenciales del Estado asegurar la vigencia de un orden justo y, de otro, que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en sus bienes y demás derechos. Ciertamente, cuando a una persona acude a la jurisdicción, llámese ordinaria u arbitral, y solicita pretensiones de contenido económico, busca con ello que la autoridad proteja los bienes y derechos en que se ha visto menoscabado. Una protección efectiva a los derechos y bienes de las personas por parte del Estado se da cuando en el marco de un proceso, en que se han probado los perjuicios sufridos, aquella logra la restauración al estado de cosas en que se encontraba antes de sufrir el daño, esto es, una reparación integral.

Imponer una carga a una persona que sufrió un perjuicio y debió acudir a la autoridad a lograr su reparación, genera *per se* que esta no se logre en su integralidad. Por el contrario, dicha carga desconoce la función del Estado de mantener un orden justo. Esto, por cuanto permite que la persona que ha sufrido un daño, solo por el hecho de acudir a la jurisdicción para buscar una reparación, tenga que asumir una carga adicional a aquella que deben asumir las personas que no han sufrido tal menoscabo o, habiéndolo sufrido, no han debido acudir a la jurisdicción para buscar su reparación. En otras palabras, la persona que busca su reparación espera que el Estado y las autoridades protejan sus derechos y bienes, y mantengan un orden justo, relativo a que se le restablezca la situación en que se encontraba antes de ser

dañado; pero, por el contrario, con la contribución objeto de análisis, se encuentra con un Estado que le impone una carga por haber sufrido un perjuicio por causas que no le fueron imputables.

De otro lado, la constitución política de Colombia establece el derecho a la propiedad privada (art. 58 CP). Si bien por la función social este derecho implica obligaciones, esto no puede ser óbice para vulnerar esa garantía por medio de los tributos. De dicho derecho, y de los principios según los cuales el sistema tributario debe ser justo y equitativo, se desprende, como lo indica Bibiana Buitrago Duarte, la prohibición de los tributos confiscatorios, en el siguiente sentido:

“Si bien en el caso colombiano el principio de no confiscación no se reconoce expresamente en la Constitución, toda vez que éste se desprende del principio de capacidad contributiva no existe duda de que la Constitución material lo contiene; pues si la propia Constitución garantiza la propiedad privada, su uso y disposición, no se puede por vía de la tributación vulnerar esas garantías, pues de nada valdría que la Constitución garantizara el derecho de propiedad y a la vez, por vía indirecta, la tributación vaciara su contenido efectivo; es ese el punto de partida que se ha considerado por la jurisprudencia y la doctrina.”

En el caso que nos ocupa, la norma demandada no solo vulnera el deber constitucional del Estado de procurar un orden justo, y el deber de las autoridades de proteger los derechos y bienes de las personas; sino, además, ligado a la protección de la propiedad privada, se trasgrede la prohibición de que los tributos sean confiscatorios. Ciertamente, se observa que la contribución grava no el patrimonio de la persona (sus rentas), el valor de su capital o una utilidad que por ellas recibe, sino el quantum recibido por una indemnización de un daño que se supone debe ser reparado de forma integral.

3. Subsanación cargo cuarto. CARGO CUARTO: VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 229 EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 116. LEY ESTATUTARIA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

El cargo cuarto expuesto en la demanda está encaminado a afirmar que la contribución contenida en el artículo 130 de la ley 1955 de 2019 es una barrera para el acceso a la administración de justicia y, por ende, una vulneración al derecho fundamental de acceso a la administración de justicia contemplado en el artículo 229 de la Carta Política.

La Corte Constitucional consideró, en el auto objeto de respuesta, que el cargo formulado carecía de los requisitos de especificidad y suficiencia y, en consecuencia, no cumplían con lo previsto en el numeral 3 del artículo 2 del decreto 2067 de 1991. Bajo esa lógica, se expondrán las razones por las cuales el cargo cumple con la especificidad y suficiencia requeridas.

Hay **especificidad** en el cargo formulado pues, si bien la contribución arbitral solo grava uno de los mecanismos previstos en la ley para acceder a la administración de justicia, la norma demandada reviste una barrera jurídica existente y creada vía legislativa para acudir al

arbitraje ya que, obliga al usuario de arbitraje a evitar el uso de la vía jurisdiccional bajo estudio.

Aunque es cierto pensar que el potencial usuario de arbitraje podría determinar si acude o no a la figura del arbitraje teniendo en cuenta el tributo demandado, lo cierto es que en la actualidad existen una multiplicidad de negocios jurídicos que contemplan, desde antes de que entrara en vigencia la contribución bajo estudio, pactos arbitrales que fueron estipulados sin conocer el gravamen adicional que fue incluido en el artículo 130 de la ley del Plan. Es así que, aquellas personas que pactaron acudir al arbitraje con anterioridad a la entrada en vigencia de la norma en comento tienen en la actualidad una barrera formal y legal de acceso a la administración de justicia.

En otras palabras, unas partes de un contrato que contiene una cláusula compromisoria desde antes de la entrada en vigencia del tributo demandado, encuentran una nueva barrera de acceso al mecanismo que de forma previa establecieron. Esto es así, pues, los extremos del conflicto no contaban con la inclusión de un gravamen adicional que no estaba contemplado dentro los gastos propios del arbitraje y del eventual litigio y, en consecuencia, deberán asumir un costo adicional que, puede suceder, no estén en capacidad de pagar.

Puede surgir el contraargumento que afirme que, las partes del negocio jurídico podrán, entrado en rigor el tributo demandado, desistir y/o eliminar la cláusula compromisoria contenida en el contrato. Sin embargo, es bien sabido que las relaciones contractuales no son pacíficas ni armoniosas en todos los casos y, por ende, puede resultar una tarea imposible realizar modificaciones contractuales. Incluso, una parte, conociendo la nueva contribución arbitral, podría evitar la modificación en aras de que la contraparte se vea en la imposibilidad de acudir al arbitraje y prefiera no resolver sus conflictos pues, la eventual condena sería imperceptible e ineficaz pues, las sumas que reciba a su favor serían, casi en su totalidad, para pagar los gastos derivados del arbitraje y, en suma, la contribución.

Por otro lado, el cargo propuesto cumple con el requisito de **suficiencia** pues, la promoción del acceso a la administración de justicia, la promoción de los mecanismos alternativos de solución de conflictos y la descongestión de los despachos judiciales en Colombia, es uno de los propósitos, fines, principios y deberes del Estado Colombiano. En efecto, promover, impulsar e incluir instrumentos y gravámenes que desincentivan, lesionan y desmotivan instrumentos como el arbitraje en Colombia, genera una atención especial para el examinador constitucional.

En ese sentido, el artículo 130 de la ley 1955 de 2019, al imponer un gravamen sobre los laudos de contenido económico superior a los 73 SMMLV, constituye una barrera formal y material de acceso a la administración de justicia, desmotiva el arbitraje e impide que mediante este mecanismo se propenda por la descongestión judicial.

El conflicto plasmado tiene un alcance persuasivo suficiente para crear en el Tribunal Constitucional una duda mínima sobre la exequibilidad de la norma demandada pues, esta contraviene los artículos 229 en concordancia con el artículo 116 de la Carta Política, sumado a la regulación estatutaria contenida en la Ley 270 de 1996, ya que, la contribución desincentiva el uso de los mecanismos alternativos, genera una barrera formal y vigente de

acceso a uno de las formas de acceder a la administración de justicia y no se ajusta al propósito común de descongestionar los despachos judiciales.

Por las razones expuestas, se le solicita al Honorable Magistrado Ponente admitir el cargo bajo estudio.

II. SOLICITUD

Se le solicita, a la Honorable Corte Constitucional, con base en los argumentos expuestos y en las consideraciones contenidas en el auto del 7 de abril de 2021, lo siguiente:

1. Admitir la demanda de inconstitucionalidad por tener acreditada la condición de ciudadanos de quienes la presentaron.
2. Admitir la demanda de inconstitucionalidad respecto de los cargos **tercero, cuarto** (subsanoado mediante este memorial), **quinto y sexto**, por considerar satisfechos los requisitos exigidos por el artículo 2 del decreto 2067 de 1991.
3. Admitir la demanda de inconstitucionalidad respecto del cargo **segundo** ajustado y complementado mediante el presente memorial, por considerar satisfechos los requisitos exigidos por el artículo 2 del decreto 2067 de 1991.

III. NOTIFICACIONES

Para todos los efectos, las direcciones donde los suscritos recibiremos notificaciones serán:

MARÍA VANESSA ARDILA ORTÍZ en el buzón electrónico vanessa.ardila@ardilalegal.com.

ANDRÉS SEGURA SEGURA en la carrera 7 # 71-21 de Bogotá D.C., oficina 1512 torre B, y en el buzón electrónico segura@alicanto.legal.

DIANA LORENA MATEUS LONDOÑO en la calle 26 A # 13-97 oficina 1301 de Bogotá y en el buzón electrónico: dlorena.mateus@gmail.com.

ANDREA PAOLA CARVAJAL SANTIAGO en el buzón electrónico: carvajalsantiago@gmail.com.

LAURA STEPHANY LEÓN HERNÁNDEZ en el buzón electrónico: lauraleon2903@gmail.com

JESSICA ANDREA VARGAS FERRUCHO en el buzón electrónico: javargasf@unal.edu.co

NERLY ROCÍO PINZÓN FLÓREZ en el buzón electrónico npinzonf@unal.edu.co.

JUAN DAVID ARCINIEGAS PARRA en el buzón electrónico:
juan.arciniegas@uexternado.edu.co.

JOHN EDWARD PACHÓN HENRÍQUEZ en la carrera 11 # 75-71 de Bogotá D.C.,
oficina 605, y en el buzón electrónico jpachon@vaa.com.co.

CARLOS EDUARDO PAREJA VISBAL en la carrera 14B #118-58, apartamento 307, de
Bogotá D.C. y en el buzón electrónico carlosparejav@hotmail.com.

ÁLVARO GIOVANNI GUTIÉRREZ GODOY en el buzón electrónico
agutierrez@gutierrezgodoy.com.

De los Honorables Magistrados,

Con todo respeto,



MARÍA VANESSA ARDILA ORTIZ
C.C. N.º 1.021.401.845 de Bogotá D.C.



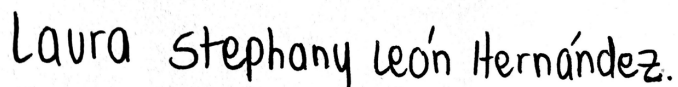
ANDRÉS SEGURA SEGURA
C.C. N.º 1.018.436.588 de Bogotá D.C.



DIANA LORENA MATEUS LONDOÑO
C.C. N.º 1.026.261.728 de Bogotá D.C.



ANDREA PAOLA CARVAJAL SANTIAGO
C.C. N.º 1.136.884.768 de Bogotá D.C.



LAURA STEPHANY LEÓN HERNÁNDEZ
C.C. N.º 1.010.235.779 de Bogotá D.C.

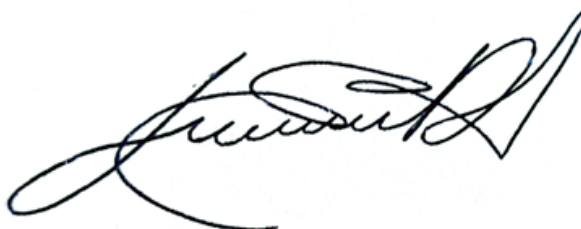


JESSICA ANDREA VARGAS FERRUCHO
C.C. N.º 1.022.404.409 de Bogotá D.C.

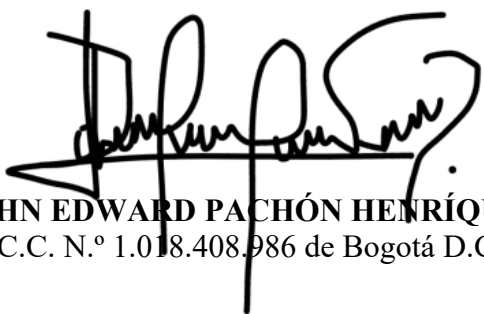
Vienen firmas...



NERLY ROCIO PINZÓN FLÓREZ
C.C. N.º 1.071.168.332 de La Calera



JUAN DAVID ARCINIEGAS PARRA
C.C. N.º 1.010.235.855 de Bogotá D.C.



JOHN EDWARD PACHÓN HENRÍQUEZ
C.C. N.º 1.018.408.986 de Bogotá D.C.



CARLOS EDUARDO PAREJA VISBAL
C.C. N.º 1.047.464.318 de Cartagena



ÁLVARO GIOVANNI GUTIÉRREZ GODOY
C.C. N.º 79.646.350 de Bogotá D.C.